

América latina
1 er. Semestre de 1986

Arturo Fernández

El 22 de abril, hablando en la Heritage Foundation¹, Ronald Reagan dijo: "Espero que todos los miembros del Congreso reflexionen sobre el hecho que los sandinistas han entrenado, sostenido, dirigido y refugiado a terroristas. En este sentido, los dirigentes nicaragüenses están tratando de construir una nueva Libia a nuestras puertas y son justamente los "contras", los combatientes de la libertad, quienes se lo impiden". En general, el Presidente de los Estados Unidos aprovechó ese discurso para relacionar sus decisiones militares contra el pueblo libio y sus propuestas respecto a la situación en América Central².

De forma cada vez más explícita el gobierno norteamericano manifiesta su voluntad de destruir toda experiencia política independentista en su área de influencia, llegando a amenazar -de forma indirecta- al régimen cubano y tratando de persuadir a los Estados latinoamericanos de su "vocación democrática"; con la finalidad de hacer coherente esta "vocación", Washington parece empeñado en desembarazarse de antiguos dictadores sumisos (Stroessner gobierna desde 1953 y Pinochet desde 1973) para reemplazar los por regímenes igualmente dóciles pero formalmente "democráticos".

Estos planes explican las transiciones operadas a principio de este año en Haití y en Filipinas y la agitación existente en Paraguay y en Chile; pero, tanto en el caso filipino como en el de los citados países sudamericanos, el proyecto de Reagan se ve obstaculizado por la movilización popular anti-dictatorial, la cual ya está jaqueando al nuevo gobierno militar haitiano.

En un despliegue propio de la "diplomacia de las cañoneras", los Estados Unidos -al mismo tiempo que continúan la "carrera armamentista" más vertiginosa

¹ La Heritage Foundation es un centro de estudios políticos adherido a la "nueva derecha" norteamericana y cuyas propuestas influyen ampliamente en los sectores más conservadores del Partido Republicano.

² El criminal bombardeo norteamericano contra ciudades de Libia había tenido efecto el 14 de abril, suscitando una preocupante adhesión de la mayoría de la opinión pública de los E. Unidos y una tímida crítica de pueblos y gobiernos europeos que se transformó gradualmente en "solidaridad" de dichos gobiernos al "Hermano Mayor".

desde la 2a. Guerra Mundial- presionan al conjunto de sus aliados y, en particular, a los endeudados Estados latinoamericanos para lograr apoyos substanciales en el logro de sus objetivos, los cuales implican el uso de la fuerza militar o, al menos, el financiamiento de costosas campañas de desestabilización, como la emprendida contra Nicaragua.

A continuación, analizaremos aspectos de la contradicción que recorre América Latina: los proyectos de dominación norteamericanos vs. Las luchas socio-políticas protagonizadas por los pueblos de nuestro sub-continente.

La acción del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo

El 21 de septiembre de 1985 el Grupo de Contadora presentó la tercera versión del Acta para la Paz y la Cooperación y se fijó un plazo de 45 días improrrogables para que los países centroamericanos expresasen su voluntad de suscribirla.

Esta propuesta contenía algunos cambios -respecto a las versiones anteriores- destinados a satisfacer al "bloque de tres" (Costa Rica, El Salvador y Honduras) y a su "inspirador", los Estados Unidos. Por ejemplo, en lugar de prohibir de plano las maniobras militares extranjeras (en directa referencia a las que realiza habitualmente el Pentágono en Honduras), se establecía una serie de normas para despojar a dichos ejercicios castrenses de su carácter intimidatorio para los países vecinos y lograr gradualmente su reducción y hasta su eliminación. Asimismo, se disponían medidas tendientes a limitar el desarrollo del armamentismo y de los efectivos bélicos.

En noviembre, Nicaragua anunciaba que no suscribiría el Acta de Contadora en tanto no se diese, de parte de los Estados Unidos, una expresa garantía de cesar todo tipo de agresión directa o indirecta; pero justamente, en estos meses, se incrementaban dichas agresiones: en octubre, el gobierno conservador del Ecuador rompía relaciones con Managua pretextando supuestos ataques verbales del Presidente Ortega; al mes siguiente, Colombia respaldaba la acusación de que el M-19 había empleado armas provistas por los sandinistas en el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá; también un helicóptero nicaragüense era derribado por un cohete tierra-aire Sam-7 disparado desde Honduras, lo cual significaba la introducción de armamento de mayor alcance en manos de los "contras" e incrementaba el peligro de una escalada militar en la frontera hondureño-nicaragüense.

Estados Unidos actuaba abiertamente por el retiro del proyecto de acuerdo del Grupo de Contadora, tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en el curso de la 15a. Asamblea General de la OEA, celebrada a principios de diciembre en Cartagena. En la misma, el Grupo de Contadora decidía aplazar por seis meses las negociaciones para obtener la firma del Acta propuesta y una resolución de apoyo a ese proceso negociador no lograba consenso. El fracaso de la gestión del Grupo de Contadora aparecía patente para satisfacción de la Administración Reagan. Pero sus cancilleres intentaron y lograron reflotar su

accionar, convocando al Grupo de Apoyo a una nueva reunión conjunta en Caraballeda (Venezuela), la cual se celebró el 11 y 12 de enero de 1986.

En este encuentro los cancilleres de los ocho Estados presentes (donde viven más del 800/o de los latinoamericanos) firmaron el "Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia de América Central", el cual ratificó los principios de autodeterminación, integridad territorial, solución latinoamericana a los problemas latinoamericanos, etc. y propició reiniciar y finalizar las negociaciones conducentes a la adopción del Acta de Contadora. Asimismo, propuso la reanudación de las conversaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua y el proyecto de constitución de un Parlamento centroamericano. Sin embargo, sorprendió con sus acusaciones al régimen nicaragüense, al cual el texto del Mensaje imputaba alinearse con el "bloque marxista-leninista".

Reactivado políticamente el Grupo de Contadora, gracias al impulso del Grupo de Apoyo, se decidió, el 7 de abril, lanzar un ultimátum a los cinco países centroamericanos para que reiniciasen las negociaciones de paz con la finalidad de concluir las en dos meses. Ello sucedió tras un incidente fronterizo al interior de Honduras, donde habría penetrado un millar de efectivos sandinistas para atacar campamentos de la guerrilla "somocista" (Washington trató de magnificar el hecho sin conseguir una respuesta entusiasta del gobierno hondureño) ello fue el producto de una reunión conjunta de los Grupos de Contadora y de Apoyo con los cancilleres centroamericanos, celebrada en Panamá, en la cual Nicaragua se negó a reducir su capacidad militar mientras subsista el respaldo norteamericano a los "contras".

Al momento de escribir estas líneas, tres semanas antes del 6 de junio (fecha en que expira el plazo dado por el Grupo de Contadora y quizá su propia mediación en el conflicto) se advierten perspectivas mínimas de alcanzar el acuerdo básico reclamado por el gobierno sandinista; el 15 de mayo, el canciller de Panamá se manifestaba muy optimista respecto a la hipótesis que Nicaragua firme el Acta de Contadora y simultáneamente los Estados Unidos suspendan su ayuda a los "contras". Por otra parte, se están negociando reformas al texto del Acta de Paz que podrían hacer viable su firma por el gobierno de Managua, aun si Washington no aceptara comprometerse, a través de un documento jurídico, a suspender su apoyo a las fuerzas anti sandinistas.

Ello no es del gusto ni del interés de los Estados Unidos que están dirigidos por una fuerza política cuyo programa de gobierno previa atacar duramente esas experiencias aleccionadoras para el conjunto de las clases y los pueblos oprimidos. Sólo la meta de disuadir a los países del llamado Tercer Mundo de ni siquiera intentar sacudirse los lazos neo coloniales, explica la saña con que "la nueva derecha reaganiana" está tratando de exterminar experiencias políticas tan diversas como las de Libia, Irán, Angola. . . y Nicaragua. Por ello es improbable que, firmando el Tratado propuesto por Contadora, cese la hostilidad de los Estados Unidos hacia el sandinismo; del mismo modo, la lucha de los pueblos de Guatemala

y de Honduras trasciende la posibilidad de una normativa reglamentaria de las relaciones internacionales.

"Habría un día que recomenzar todo de cero, puesto que Estados Unidos deberá aceptar la existencia, en América Latina, de regímenes que no son de su gusto". . . dice el periodista mexicano Jorge Castañeda en un artículo en el cual reconoce la necesidad de la coexistencia entre la Súper Potencia del Norte y América Latina, impuesta por la Geografía; pero -agrega- "ella no puede convertirse en un fin en sí mismo". (Ver Le Monde Diplomático, Ed. Cono Sur No. 8, pág. 8 y 9). Los pequeños pueblos del istmo centroamericano piensan que no es hora que los "gringos" comprendan estas realidades por la sola práctica de la prédica o de la apelación a la ética; ellos piensan que sólo una correlación de fuerzas adversa doblegará la multiseccular tendencia imperial a explotar y humillar a sus vecinos del sur de Río Grande. Sólo dicha correlación impedirá que el Congreso americano se incline una vez más ante la voluntad presidencial y otorgue su apoyo económico masivo a las bandas somocistas que están sembrando sólo destrucción y muerte en Nicaragua.

Desde hace más de tres años, el Grupo de Contadora -formado por México, Colombia, Panamá y Venezuela- ha neutralizado parcialmente la belicosidad de la Administración Reagan, tratando de circunscribir el tema centroamericano a la formulación de pautas jurídicas de convivencia; en ello ha sido valiosamente apoyado por el Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú, Uruguay) desde el año pasado. Sin embargo, al momento de aproximarse la firma del Acta de Paz, la letra de la misma -por más perfeccionada que sea su redacción- pone entre paréntesis el problema esencial de la cuestión centroamericana. El consiste en la inequívoca voluntad del pueblo de Nicaragua (y quizás pronto la del pueblo del Salvador) de escoger una forma de organización social que supedita el Capital y el mercado a la voluntad del Estado Nacional.

La caída del "Baby Doc" Duvalier

Durante el mes de enero del presente año, se multiplicaron las manifestaciones de descontento contra la vieja dictadura duvalierista, caracterizada por una corrupción político-administrativa sin límites y por el temible apoyo que le brindaba un cuerpo para-militar creado por "Papa Doc", conocido por la denominación popular de sus miembros, los "tonton macoute". En realidad, Haití estaba viviendo el tercer mes de desórdenes populares como producto de la creciente impopularidad del régimen dictatorial, de las dificultades económicas generalizadas y de la acción de movimientos sociales más o menos coordinados por la Iglesia Católica.

El 27 de enero se registraron violentos enfrentamientos en Cap Haitien, la segunda ciudad del país, con un saldo de 5 muertos entre los manifestantes, duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad; el 29 más de 40 mil personas se reunían en dicha ciudad para condenar al gobierno, al tiempo que se generalizaban los incidentes en el resto del país. El 30, el gobierno de Washington

bloqueó la mitad de la ayuda destinada a Haití; luego se sabía que el proceso haitiano era seguido con preocupación y de cerca por los Estados Unidos que, a fines de enero, seguramente había decidido el alejamiento del dictador y estaría buscando una alternativa de gobierno satisfactoria para el mantenimiento de sus intereses. Por ello, el 31, el portavoz de la Casa Blanca anunció apresuradamente la caída de Jean Claude Duvalier para rectificarse luego. Ese día, varios miles de personas manifestaban en las principales ciudades, incluida Puerto Príncipe, la capital; se rumoreaba la existencia de muchas víctimas en los enfrentamientos con las fuerzas policiales y para policiales. Al terminar ese día 31, el dictador habló por televisión asegurando que controlaba la situación e impuso la Ley Marcial, instando a reiniciar las actividades laborales interrumpidas durante esa jornada.

Sin embargo, la normalidad no se restablecería en los días sub-siguientes; muchos negocios permanecían cerrados por decisión de sus mismos propietarios y el "clima anti-duvalierista" continuaba ampliándose. Entre tanto la "célula de crisis", constituida en el Departamento de Estado, elaboraba el plan tendiente a alejar al dictador de Haití lo más rápido posible, con la finalidad de evitar una radicalización de la movilización popular. Ello se concretó en la noche del 6 al 7 de febrero, en la cual "Baby Doc" y su familia se embarcaron en un avión de la Fuerza Aérea norteamericana rumbo a Francia. A las pocas horas, se formó un Consejo Nacional de Gobierno cívico-militar, presidido por el Gral. Henry Namphy, jefe del Estado Mayor del Ejército, e integrado, por otros tres militares y dos civiles, de los cuales sólo uno de ellos había sido opositor al "duvalierismo". (Se trataba del presidente de la Liga de Derechos Humanos Gérard Gourgue). El Consejo nombró un gabinete de 13 ministros, con predominio militar y cuyos miembros habían estado más o menos ligados al régimen depuesto.

Desde principios de marzo, se reanudó la agitación socio-política, signo de la impaciencia popular por lograr mayores grados de libertad y de justicia. Los manifestantes, en gran medida fruto del espontaneísmo, reclamaban la instauración de un gobierno civil; pero es cierto que Haití carece de estructuras partidarias sólidas actuantes al interior del país y capaces de orientar las luchas populares.

A fines de marzo, se produjo la primera crisis política del flamante régimen: Gourgue renunció en signo de disconformidad con la actitud policial para controlar las manifestaciones callejeras y Namphy aprovechó para reorganizar el Consejo y el gabinete; el Consejo de Gobierno quedó reducido a tres miembros, incluido el Presidente, y se reforzaba el papel gubernamental de los militares, Namphy prometía llamar a elecciones presidenciales y elaborar una Constitución que remplazase la que regía en tiempos de Duvalier. Pero estas promesas aún no se han concretado y poco o nada ha hecho el régimen militar para calmar las inquietudes populares.

En consecuencia, continuaron manifestaciones cada vez más antigubernamentales, lo cual derivó en los hechos acaecidos en Puerto Príncipe, el 26 de abril, con un saldo de 8 muertos, a manos de las fuerzas de seguridad. La situación socio-económica desesperante y las esperanzas populares

desencadenadas por la caída de la dinastía Duvalier explican esta efervescencia que no le ha otorgado "períodos de gracia a un gobierno demasiado comprometido con el pasado "duvalierista" y demasiado dependiente de los Estados Unidos para atreverse a realizar las "reformas urgentes" que reclamaba la Iglesia en los últimos tiempos de la dictadura.³

La cólera popular se canalizó, sobre todo en la capital, hacia una cierta caza de los odiados "tonton macoute", cuyos jefes estarían ocultos o han abandonado Haití. Si la impresión de ciertos grupos de exiliados fue que se había instaurado un "duvalierismo" sin Duvalier, parece totalmente cierto que el pueblo recibió con júbilo la entronización de las Fuerzas Armadas en los puestos de mando principales del Estado; aparentemente los militares habían conseguido disociar su propia imagen de aquella que presentaba el dictador y su séquito. De todos modos, los primeros días de gobierno del Consejo marcaron el restablecimiento de libertades públicas desconocidas durante el "duvalierismo", la liberación de presos políticos y algunas medias judiciales destinadas a investigar y sancionar a los presumibles autores de crímenes políticos durante la pasada dictadura.

La Resistencia Chilena continúa

Desde hace más de dos años los sectores populares chilenos han ganado la calle para forzar la democratización de su patria, apoyados por los partidos mayoritarios y por un amplio espectro de instituciones y movimientos sociales. Los hechos de Haití y, a los pocos días, los de Filipinas repercutieron sobre la oposición a la dictadura de Pinochet, alentando nuevas estrategias y tácticas; pero también incrementaron el debate sobre el rol de los Estados Unidos en la política de los países periféricos y la necesidad de contrarrestarla.

Las movilizaciones se suceden a partir de marzo: el 7 de este mes, chocaron opositores al pinochetismo y policías en el centro de Santiago; el saldo fue de 50 detenidos. El 20, se realizó la primera Jornada de Protesta del año, produciéndose violentos incidentes que se prolongaron hasta el día siguiente en algunos barrios de la capital. Entre el 18 y el 24 de abril, hubo represión y masivas detenciones de universitarios que desafiaron a la dictadura, tras el movimiento huelguístico iniciado por la Federación de Estudiantes de Chile y al cual adhirieron numerosos docentes. El 1 de mayo, la conmemoración del Día del Trabajo -organizada por el sindicalismo generó un impresionante despliegue represivo que detuvo a centenares de personas.

³ El 26 de abril, una pacífica marcha de sectores democráticos se acercó a una antigua cárcel duvalierista, hoy convertida en puesto policial; eran alrededor de 10 mil manifestantes. Los policías, aparentemente enervados, temieron que la multitud intentase ocupar el puesto, y comenzaron a disparar sus armas de fuego.

Asimismo se ha incrementado el número de atentados provocados por las organizaciones armadas de la Resistencia, del mismo modo que los allanamientos de domicilios y las "razzias" practicadas por efectivos militares en los barrios populares. En abril, la oposición democrática creó un nuevo instrumento de acción unitaria, la Asamblea de la Civilidad, construida alrededor de las asociaciones intermedias y los movimientos sociales y no de los partidos políticos. La "Asamblea" nuclea 18 organizaciones que engloban a empresarios, trabajadores y profesionales y expresa a todas las fuerzas políticas democráticas. Su objetivo inmediato es elaborar un "Petitorio de Chile", para ser entregado al Gobierno, en el cual se plantearían los reclamos globales y sectoriales de los integrantes de la "Asamblea", encabezados por el del retorno a la democracia. Si ello obtuviese respuesta negativa, como es presumible, se trataría de convocar a un gran paro nacional para forzar la renuncia de; dictador y una negociación con las Fuerzas Armadas.

Pese a las divergencias entre los partidos, es muy probable que todas las tendencias democráticas apoyen esta línea de acción unitaria que sería aceptable para los Estados Unidos, aparentemente dispuesto a "sacrificar" otro dictador "amigo" en aras de una transición controlada y controlable a la democracia, Sin embargo, la realidad chilena ofrece una dificultad poco común en América del Sur: la existencia de un fuerte Partido Comunista, popular y con larga tradición de liderazgo en el movimiento obrero, sin cuya participación la vida democrática chilena sería una burla.

El P.C. apoya las acciones de la resistencia armada y pretende que la transición chilena a la democracia no sea controlada exclusivamente por la derecha y demás sectores dóciles a los designios de los Estados Unidos. Por su parte, son estos sectores los que, alentados por experiencias como la haitiana o, en alguna medida, la filipina, aspiran ahora a lograr el apoyo de Washington para asumir la dirección de un proceso democrático limitado y excluyente de la izquierda. En las últimas semanas, sin embargo, parecieran surgir claros indicios que las divisiones partidarias, que han prolongado la tiranía chilena, podrían ser relativizadas por la práctica creciente de la unidad en las bases.

La Resistencia Paraguaya gana la calle

El apoyo norteamericano a cierto tipo de luchas antitictatoriales y cierta inclinación de Reagan a deshacerse de los dictadores inútiles han agitado el panorama político paraguayo, al tiempo que Stroessner aparece viejo y algo enfermo y que su sucesión es fuente de conflictos en su entorno político.

La resistencia paraguaya a la más antigua dictadura de América del Sur ha sido permanente y, a veces, heroica; pero, duramente reprimida, estaba obligada a la clandestinidad o a la semi-clandestinidad. En los últimos meses ha vuelto a ganar las calles, a partir del 16 de marzo, fecha en la que 3.000 opositores a la dictadura

manifestaron en las calles de Asunción. Hubo actos políticos en Abril y una manifestación sindical el 1 de Mayo, la cual fue reprimida por la policía.

También se produjeron represalias de las bandas armadas del oficialista Partido Colorado contra opositores y manifestantes. Pero el miedo se está perdiendo en el conjunto de la sociedad y el régimen dictatorial hace concesiones que parecen signos de debilidad; por ejemplo, permitir el retorno al país del líder democristiano Alfonso Resck; o "tolerar" una mínima libertad de prensa.

Como en el caso haitiano, los cuatro partidos de oposición real a la dictadura son débiles; pero a diferencia del citado caso caribeño existen algunos movimientos sociales (sindicatos obreros y campesinos, comunidades de base...) con ciertas tradiciones de lucha y organización que pueden favorecer el desarrollo de la movilización social. Aquí también la Iglesia está jugando desde hace al menos cinco años, un prudente pero activo rol democratizador siendo la única institución crítica al régimen que se encuentra presente en todo el país. El 23 de abril, la Conferencia Episcopal paraguaya lanzó una proposición de diálogo nacional que desearía, sin expresarlo directamente, encarrilar una suave transición como las que permitieron democratizar, a través de la negociación con los militares, los regímenes políticos autoritarios del Brasil y de Uruguay.

También sectores de industriales y comerciantes han manifestado su preocupación por el anquilosamiento de la conducción económica del país, que traba la voluntad democratizante de la burguesía lúcida.

Con motivo de la fiesta patria, el 14 de mayo, los partidos opositores organizaron un acto paralelo al oficial, al que concurrió un millar de personas; dicho acto fue autorizado por la dictadura en el marco de una embrionaria negociación entre Gobierno y Oposición; sin embargo, el propio Stroessner ha amenazado usar sus bandas para-militares para mantener "el orden" y se multiplican las amenazas y el hostigamiento contra los resistentes.. .

Pese a ello, los nazis refugiados, los contrabandistas y demás sectores más o menos delictuosos que se asociaron al Dictador y su cohorte de compinches están perdiendo, día tras día, el "Paraíso stroessnerista"... Este no parece a punto de derrumbarse pero nunca volverá a ser "el país del miedo", en el cual 100% de su población fue encarcelada durante la actual dictadura.

El viejo fantasma del militarismo en el Ecuador

Entre el 6 y el 14 de marzo, el Jefe de-la Fuerza Aérea ecuatoriana protagonizó un "pronunciamiento golpista" que, inicialmente, estaba dirigido contra el Ministro de Defensa y contra el Jefe del Ejército , ambos personal castrense; pero el militar sublevado, Gral. Frank Vargas Pazos, tras rocambolescas peripecias, terminó enfrentando al Gobierno civil derechista presidido por Febres Cordero. Su intento de derribarlo no tuvo eco en la mayoría de las Fuerzas Armadas y, al fin, éstas aplastaron el foco rebelde.

Sin embargo, la asonada del Gral. Vargas -por más pintoresca que haya aparecido- da lugar a dos tipos de reflexiones:

- El peligro militarista no se ha erradicado de América del Sur por más que, hoy, sólo dos dictadores militares sobreviven a duras penas en el conjunto de la región latinoamericana: Pinochet y Stroessner. En efecto, tal como lo señala un Informe reciente de la Revista "News Week", los regímenes democráticos precarios de varios de estos países poco han hecho para modificar las pautas de formación y de organización de su personal militar; por lo tanto, "alguna vez y en alguna parte de Latinoamérica el "péndulo" puede volver-a moverse a favor de los uniformados. Después de todo, los problemas gemelos de la deuda y de la insurgencia no van a hacer nada fácil el mantenimiento de gobiernos eficaces y ordenados por parte de los civiles" ("News Week, No. 16, 21/IV/1986).

Por otra parte, el Gral. Vargas dijo que se alzaba contra la corrupción y el mal gobierno de la derecha ecuatoriana; aunque sospechamos que su discurso era puramente demagógico, no hay dudas que puede basarse sobre hechos ciertos e impactar a la opinión pública en países cada vez más desencantados de la ineficacia de los regímenes democráticos, incapaces de resolver los problemas básicos de la sociedad. Más aún, ese discurso puede atraer a sectores nacionalistas de diverso signo, civiles o militares, los cuales reaccionan con creciente virulencia ante la "modernización" dependiente y socialmente injusta que están encarando la mayor parte de las nuevas (y no tan nuevas) democracias latinoamericanas.

El viejo fantasma del militarismo sólo será aniquilado por la acción de gobiernos y pueblos que combatan al unísono la injusticia, el autoritarismo y la dependencia que sufre-nuestro sub-continente.